

C.A. de Santiago

Santiago, seis de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS.

PRIMERO: Que se presenta doña LORENA FACUSE ROJAS, Alcaldesa de la MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS, quien de conformidad a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 20.285, deduce reclamo de ilegalidad en contra del CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, en adelante CPLT, representada por su Director don FRANCISCO JAVIER LETURIA INFANTE. Explica que se acogió el amparo de acceso a la información pública, Rol C1643-23, a requerimiento del solicitante, Cesar Orrego Berrios, quien realizó una presentación pidiendo los antecedentes del "concurso" realizado para elegir al Director de la Escuela Cóndores de Plata "D N° 259" de Cerrillos del año 2018. Añade que, con fecha 16 de enero del año en curso, luego de haberle requerido dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 20.285 y 28 letra b) del Reglamento de la Ley de Transparencia y la Instrucción General N.° 10, punto 1.2, esto es, que señalare su domicilio, no cumplió, teniéndolo por desistido de su solicitud de acceso a la información, el día 31 del mismo mes y año.

El solicitante, con fecha 4 de febrero último, dedujo amparo de acceso a la información pública, del siguiente tenor "(...) *no estoy de acuerdo con la subsanación dado que la ley 20285 faculta para que me envíen la informaron por correo electrónico y se hace necesaria ml dirección particular*".

Con fecha 23 de junio de este año, el CPLT, acogió el amparo, disponiendo que se le entregara al solicitante la información, en los términos que se particulariza en la resolución que se transcribe, a pesar que el requisito del domicilio, nunca fue el domicilio "postal" como señaló, pues lo requerido era el domicilio civil, ya que la Ley así lo establece. El fundamento Se funda lo encuentra en los artículos 12 de la Ley 20.285 y 28 letra b) del Reglamento de la Ley de Transparencia y en la Instrucción General N.° 10, punto 1.2, que imponen la obligación de aportar, por parte del solicitante, su domicilio. Lo que se ratifica en el artículo 61 del Código Civil, siendo el domicilio, en su concepto, un atributo de la personalidad. Impugna,



XXEFXJHCQXE

de este modo, lo argumentado por la reclamada al resolver el amparo, pues no es aplicable la Ley 19.880; pues siendo la Ley 20.285, especial, y prima por sobre la general.

La Ley manda, prohíbe o permite, y la ley, en ningún momento, usa la locución podrá, sino que, enfáticamente, señala que la solicitud de acceso a la información deberá contener, por tanto, no es facultativo, es imperativo, exigible y totalmente obligatorio, cuestión que por nada afecta los principios de facilitación y máxima difusión.

El no señalamiento del domicilio implica problemas para dar por cumplido nuestro deber como órgano del Estado, pues si la persona no tiene su correo habilitado, la casilla está llena, o lo ha consignado mal en el formulario, no se podrá dar cumplimiento a la obligación legal pues no habrá donde hacer llegar la información requerida, lo que implica la importancia de este requisito.

Pide, se acoja el reclamo de ilegalidad, declarando que se encuentra ajustada a derecho la subsanación y desistimiento declarados por su representada, por no dar cumplimiento a lo dispuesto a la normativa ya particularizada, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe, el CPLT solicita el rechazo del reclamo por los fundamentos que esgrime. En primer lugar, se refiere a los hechos que dan origen a la decisión de amparo que acogió. En cuanto al fondo, expresa que el debate no se centra en determinar ni resolver acerca de la publicidad o reserva de la información objeto del requerimiento de información o la procedencia de causales de reserva; sino únicamente en una cuestión de carácter procesal, esto es, si la Corporación obró conforme a derecho al acoger a tramitación el amparo rol C1643-23, desestimando la alegación del Municipio consistente en que la solicitud de acceso a la información, no cumplía con el requisito establecido en el artículo 12, letra a) de la Ley de Transparencia, para ser tramitada por el órgano requerido. Hace presente que el Amparo Rol C1643-23, no adolece de ilegalidad, especialmente, porque no se controvierte el elemento sustancial del procedimiento de amparo, esto es, que la información solicitada es, efectivamente, de carácter público y que debe ser entregada al solicitante. Antes de analizar las alegaciones concretas formuladas por la Municipalidad de Cerrillos, reitera que lo que generó el amparo fue el requerimiento de información, fue ingresado a tramitación por el solicitante de información señor Orrego, por



medio del portal de transparencia, el día 13 de enero de 2023, en el que indicó- con claridad- la información objeto de la solicitud, su nombre, su dirección electrónica, precisando que los antecedentes se requerían, en formato digital. A pesar de lo indicado, la Municipalidad, solicitó su subsanación al señor Orrego, por cuanto -en su opinión- no cumplió con el requisito establecido en el artículo 12, letra a) de la Ley antes citada, al no informar una dirección postal en su requerimiento de acceso. A raíz de dicha situación, el solicitante dedujo amparo ante el Consejo, señalando que la solicitud de subsanación resultaba totalmente improcedente. En base a lo anterior, entonces, la Municipalidad sostiene su impugnación, sobre la base de indicar que resultaba improcedente admitir a tramitación el amparo, por falta de cumplimiento de un requisito de procesabilidad de aquellos contenidos en el artículo 24 de la ley N° 20.285, por cuanto en el caso de marras no se configuró ninguna de las hipótesis de denegación de acceso a información pública ahí descritas, ya que la solicitud de subsanación ejercida por la Municipalidad no es una “denegación” de información, sino que una solicitud de subsanación en conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la LT, letra a) de la LT, que no fue efectuada por el solicitante de acceso, por lo que se éste se debe entender como “desistido.” Luego de transcribir el artículo 24, señala que lo realizado por la reclamante es una denegación de la información y por tanto está facultada para conocer de la controversia surgida a propósito del presente amparo. Lo anterior entiende que se ratifica con lo que indican los artículos 32, 33 letras a) y b) y, en último término, el artículo 12 todos de la ley antes particularizada. En consecuencia, es posible concluir que una solicitud de subsanación formulada por un órgano y posterior aplicación de apercibimiento de tener por desistido un requerimiento de información, puede dar lugar a un amparo por acceso a información pública, en la medida que aquella no se aplique correctamente, impidiendo, por lo tanto, obtener la entrega de antecedentes como los solicitados al servicio en comento. No existe por tanto ilegalidad en su actuar.

En cuanto a la decisión expresada en el amparo, señala que fue acogido, precisamente, porque, a diferencia de lo que sostiene la reclamante, la solicitud de información tramitada por el señor Orrego ante la Municipalidad de Cerrillos, cumplía los requisitos legales para



ser conocida y respondida por el órgano, sin necesidad de efectuar el procedimiento de subsanación contemplado en el artículo 12; y la aplicación del apercibimiento de tener por desistida la solicitud, fundado en falta de subsanación del requirente, resultaba improcedente.

Luego de transcribir las normas atinentes a la materia, se concluye que una solicitud de acceso a la información pública, puede ser ingresada a tramitación mediante medios materiales o electrónicos, a elección del requirente y que la exigencia para el requirente de acceso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12, letra a), es informar una “dirección”, y no un domicilio postal, como acotadamente lo interpreta la recurrente de autos. La exigencia de una “dirección” no es un mero formalismo, sino que tiene una *ratio legis*, vinculada esencialmente a que el órgano requerido cuente con una forma precisa de proceder a la entrega de la información, objeto del requerimiento, al respectivo solicitante, la que, al igual que la forma de ingresar la solicitud de acceso, puede ser entregada al interesado en formato material o electrónico, como lo establece expresamente el numeral 1.2. de la Instrucción General N° 10, del Consejo, sobre Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información. En consecuencia, la interpretación de la reclamante es errada al equiparar el término “dirección”, únicamente a un domicilio postal, olvidando que un requerimiento de acceso puede ser íntegramente tramitado por vía electrónica, por expresa disposición normativa. En consecuencia, la exigencia de informar dirección se ve satisfecha por el solicitante de acceso al indicar una dirección de correo electrónico, máxime si los antecedentes objeto del requerimiento se solicitan en formato digital, como en el caso de autos. En este orden de ideas, cabe tener presente, respecto a la forma de operativizar el ejercicio material del derecho de acceso a la información pública y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, es que a partir del año 2013 en adelante, el Consejo ha creado el denominado “Portal de Transparencia” que es una plataforma electrónica creada a fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública, educar y promocionar el derecho a saber, recopilar y analizar la información de esta política pública, fiscalizar el cumplimiento de la normativa, apoyar a los servicios públicos en su gestión de transparencia, posicionar el rol del Consejo,



y contribuir a la modernización del Estado. En caso de solicitudes de acceso a la información, el requirente debe ir al sitio web del organismo y presionar el banner "Solicitar Información" o bien, puede acceder al Portal y buscar el organismo en el directorio de organismos ingresando su requerimiento vía on line. Respecto de la exigencia legal de "identificación del solicitante", el requirente debe informar su nombre, y en cuanto al domicilio, se otorga al ciudadano la opción de informar dirección postal y electrónica, o bien, únicamente una casilla de correo electrónico, para efectos de comunicaciones en el procedimiento de acceso a la información regulado por la ley. Lo anterior, es relevante para efectos de resolver la controversia, por cuanto, el requirente de acceso, señor Orrego, utilizó el Portal de Transparencia para solicitar información a la Municipalidad, con fecha 13 de enero de 2023, mediante folio MU034T0003073, en el que consta que el requirente consignó, debidamente, una casilla de correo electrónico a fin de recibir la información requerida, y que solicitó que los antecedentes fueran enviados en formato digital.

En consecuencia, la solicitud, cumplía, a cabalidad, con el requisito de "identificación del requirente", en los términos exigidos por el artículo 12, tantas veces citado, por lo que resultaba manifiestamente improcedente y desproporcionado requerir al solicitante que subsanara su requerimiento de información por tal motivo. Esta conclusión, además, descansa en uno de los principios fundamentales que plasman el derecho de acceso a información pública, esto es, el Principio de Facilitación, consagrado en el artículo 11 letra d), de la Ley, el que se transcribe y que al exigir información sobre un domicilio postal, está exigiendo requisitos no contemplados en la Ley 20.285, vulnerando una garantía constitucional implícitamente garantizada en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República y el artículo 11, letra d), obstruyendo u obstaculizando su debido ejercicio. Por lo anterior, resultaba también improcedente la aplicación del apercibimiento consistente en tener por desistido el requerimiento. Por último, señala que, la condena en costas pedida por la reclamante, en caso de acogerse este reclamo, resulta improcedente porque su representada es el órgano obligado a pronunciarse sobre una controversia jurídica suscitada entre un solicitante de información, un órgano del Estado, y eventualmente, un



tercero interesado, y que en tal posición tiene motivo plausible para litigar.

TERCERO: Que el tercero interesado debidamente notificado, aportó a esta Corte, su domicilio particular, ubicado en la comuna de Maipú

CUARTO: Que, en la especie, la decisión de Amparo del Consejo para la Transparencia, dispuso:

“I. Acoger el amparo deducido por don César Orrego Berríos, en contra de la Municipalidad de Cerrillos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Cerrillos, que:

a) Entregue al reclamante los antecedentes respecto del concurso público realizado para elegir al Director de la Escuela Cóndores de Plata D N° 259 de Cerrillos del año 2018, particularmente, con relación a los Criterios de evaluación; Terna, incluyendo el curriculum del ganador del concurso; Puntajes de los ganadores de la terna; y Criterio para elegir al ganador, debiendo reservar, previamente, todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, el nombre de los no ganadores, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, el estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros datos de terceros que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), 4 y 10 de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su



actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en Conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de Este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don César Orrego Berríos y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Cerrillos.”

QUINTO: Que lo que debe dilucidarse es si, el Consejo para la Transparencia, incurrió en la ilegalidad denunciada, al acoger el Amparo C 1643-2023, disponiendo que la Municipalidad de Cerrillos entregue la información requerida por el señor Orrego, entendiendo que cumplió en su solicitud, los requisitos que dispone la normativa vigente.

SEXTO: Que, lo primero que debe tenerse presente es que el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, reconoce, como regla general y básica, la publicidad de los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, pudiendo establecerse su secreto o reserva solo por ley de quórum calificado cuando dicha publicidad afecte la función de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

SÉPTIMO: Que la ley N°20.285, que se denomina *Ley sobre Acceso a la Información Pública*”, consagra la normativa mediante la cual se dispone el cumplimiento de la norma constitucional antes transcrita. En la especie, no se ha controvertido, que la información es pública y que es de aquellas que puede entregarse al solicitante.

La controversia en cambio, se ha producido en un situación meramente de carácter procesal, esto es, si la solicitud que se planteó a la Municipalidad de Cerrillos la que solo señalaba el correo electrónico del solicitante señor Orrego; satisfacía lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley 20.285; y en su caso, si correspondía haberlo



tenido por desistido de su solicitud al no proporcionar el *domicilio civil*, como lo exigía la reclamante.

OCTAVO: Que, al efecto, para decidir lo que se ha planteado en esta reclamación corresponde que esta Corte, analice las normas atinentes a la materia, a saber:

Artículo 12 de la Ley 20.285

La solicitud de acceso a la información será formulada por escrito o por sitios electrónicos y deberá contener:

- a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso.
- b) Identificación clara de la información que se requiere.
- c) Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado.
- d) Órgano administrativo al que se dirige.

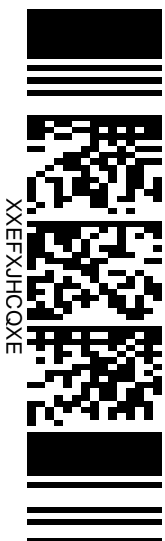
Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contados desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

El peticionario podrá expresar en la solicitud, su voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento administrativo de acceso a la información, indicando para ello, bajo su responsabilidad, una dirección de correo electrónico habilitada. En los demás casos, las notificaciones a que haya lugar en el procedimiento se efectuarán conforme a las reglas de los artículos 46 y 47 de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

Artículo 28 del Reglamento de la ley 20.285

Admisibilidad de la solicitud. La solicitud será admitida a trámite si da cumplimiento a los siguientes requisitos:

- a) Se formula por escrito o por sitios electrónicos, a través del sitio especificado para la recepción por el respectivo organismo público.
- b) Señala el nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso.
- c) Identifica claramente la información que se requiere. Se entiende que una solicitud identifica claramente la información cuando indica las características esenciales de ésta, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, origen o destino, soporte, etcétera.



d) Contiene la firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado, entre los cuales se entiende incluida la firma electrónica simple o avanzada.

e) Indica el órgano administrativo al que se dirige.

Artículo 29

Inadmisibilidad provisoria. Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el artículo anterior, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, sin necesidad de dictar una resolución posterior.

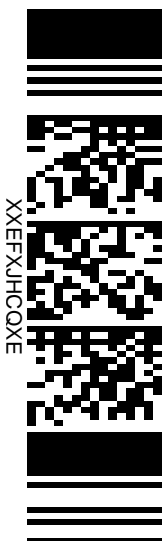
Instrucción General N° 10, sobre procedimiento administrativo de acceso a la información de este Consejo

N° 1.2. Formatos de presentación y requisitos de las solicitudes de acceso a la información

La presentación de solicitudes de acceso a la información deberá ser efectuada por escrito, pudiendo para ello el peticionario elegir entre el formato material o el electrónico. En todo caso, cualquiera sea el formato de presentación, los requisitos mínimos que deberá contener la solicitud de acceso a la información, son los siguientes:

a) Identificación del solicitante. Indicar nombre y apellidos o razón social (si corresponde) del solicitante, nombre y apellidos del apoderado (si corresponde) y dirección (particular, laboral y/o de correo electrónico) del requirente o de su apoderado. (...)

Parte final: “Para el caso de no cumplir con uno o más de ellos, se comunicará de inmediato al requirente de esta situación, indicándole con exactitud cuál o cuáles requisitos debe subsanar y la forma de hacerlo. Para estos efectos el solicitante contará con un plazo de 5 días hábiles contados desde la correspondiente notificación, bajo apercibimiento de tenerse por desistido de su petición (...) Frente a una solicitud poco clara o genérica de acceso a la información pública, los órganos deberán aplicar el mecanismo de notificación señalado en este numeral, es decir, solicitar al peticionario que subsane el defecto de falta de identificación de la información pedida detectado en el correspondiente requerimiento, dentro del plazo de 5 días hábiles. Se entenderá por solicitud poco clara o genérica aquella que carece de especificidad respecto de las



características esenciales de la información requerida, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera”.

NOVENO: Que de toda la normativa que antes se ha particularizado y haciendo aplicación, además, de uno de los principios que consagra la ley 20,285, en su artículo 11 letra f), esto es, el de Facilitación que señala que: “los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo”, no cabe duda que, tal como lo sostiene la reclamada, la requirente de información, al señalar en su solicitud, su correo electrónico, dio cumplimiento a la normativa vigente, pues ella es suficiente para satisfacer la exigencia de su domicilio, sobre todo si la petición que se formulaba debía enviarse en formato PDF. Corrobora el aserto anterior, precisamente que el objeto de tal solicitud es conocer el lugar donde debe enviarse la información requerida, lo que en este caso se cumple si se individualiza el correo electrónico. Por otro parte, que se indique, por la reclamante que, podrían ocurrir problemas técnicos que impedirían el envío de esa información, por dicha vía, como por ejemplo, error en la dirección, que la casilla esté llena, etc; bastaría que dejara constancia de tales dificultades, porque se aplicaría aquel aforismo: “*a lo imposible nadie está obligado*”.

DÉCIMO: Que desde esta perspectiva entonces, la interpretación en conjunto de la normativa antes señalada, la aplicación del principio de facilitación de la ley N°20.285; lo que se ratifica, además, con lo que señala el artículo 30 letra a) de la Ley 19.880: el solicitante al indicar en su requerimiento de información, su correo electrónico dio cumplimiento al artículo 12 de la Ley 20.285, de modo que, no correspondía a la reclamante exigirle el domicilio civil, ni menos, con posterioridad, tenerlo por desistido de su solicitud.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, al haberse acogido el amparo y decidirse que la Municipalidad de Cerrillos debe proceder a la entregar de la información solicitada por el señor Orrego, no se ha incurrido en ilegalidad, por lo que la reclamación en estudio debe desecharse.

Por estos fundamentos, citas legales y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 1, 21, 28 de la Ley N



20.285, sobre Acceso a la Información Pública, **se rechaza** el reclamo de ilegalidad deducido por la Municipalidad de Cerrillos, declarándose que no ha existido ilegalidad en lo resuelto por el Consejo para la Transparencia, en la Decisión de Amparo Rol C 1643-2023, sin costas.

Redacción de la ministra señora Marisol Rojas Moya

Regístrese y Comuníquese

N° Contencioso Administrativo-450-2023.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Jorge Zepeda Arancibia, señora Marisol Andrea Rojas Moya, y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia. No firma el ministro señor Zepeda Arancibia, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, seis de noviembre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Marisol Andrea Rojas M. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, seis de noviembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a seis de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 03 de septiembre de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>